

# ¿QUE ES LA ECONOMIA SOCIALISTA?: UNA ECONOMIA PLENAMENTE EMANCIPADORA

**Ernest Mandel**

## I. EL PROBLEMA

En el curso del siglo XX la humanidad ha experimentado con dos sistemas económicos fundamentalmente diferentes: la economía capitalista/imperialista y la economía basada en la semiplanificación (cuasiplanificación) burocrática, habiéndose mostrado ambos inadecuados desde el punto de vista de la emancipación humana.

Podríamos objetar que la fórmula «desde el punto de vista de la emancipación humana» refleja una cuestión previa axiomática. El libre desarrollo de todos los individuos, es decir, la supresión de todas las situaciones de alienación, de explotación y de opresión se plantea como si fuera el único objetivo válido de la organización económica. Y esto es exacto. Pero no hace falta ser marxista ni socialista ni hegeliano para reconocer que esta postura tiene una base sólida. Ya Kant afirmó claramente que el ser humano es la única finalidad suprema del hombre. Cualquier punto de partida diferente transforma al hombre y a la mujer en medios y los degrada inevitablemente.

Se podría objetar, también, que tender hacia una organización social de la economía, en la cual, para citar el *Manifiesto Comunista*, «el desarrollo libre de todos tiene como condición el desarrollo libre de cada uno», es perseguir un imposible, una utopía, y que esto se opone a la realización de fi-

nes más limitados y más razonables. Esta objeción no es válida.

Nosotros, los socialistas/comunistas democráticos y marxistas de ningún modo tenemos en mente una sociedad ideal, sin problemas, «el fin de la historia» o de otros mitos que se nos atribuyen. A lo que aspiramos, con más modestia, es a alcanzar seis o siete metas emancipadoras básicas. Su consecución significará el fin de la prehistoria humana, del drama de la lucha de todos contra todos por el pan cotidiano. A partir de ahí comenzará la verdadera historia humana. El drama humano vendrá a sustituir a los dramas inhumanos. Muchos problemas quedarán sin solución inmediata. Surgirán otros nuevos. Pero difícilmente se podrá negar que el mundo en el cual se puedan resolver estos seis o siete problemas clave será un mundo cualitativamente mejor que el mundo actual.

Decir que esto es imposible no es más que reiterar el dogma del pecado original bajo una forma un poco modernizada. Es condenar a la humanidad a un destino basado en los sufrimientos humanos permanentes.

Nosotros consideramos que esta resignación es inmoral e irracional. Preconizamos una lucha continua contra toda situación alienante y alienada. Sólo la experiencia práctica podrá demostrar a la larga hasta qué punto y en qué plazo este combate será o no victorioso.

Mientras tanto, la tesis de Goethe y de todos los conservadores, según la cual la injusticia existente es preferible a la lucha por su eliminación ya que esta lucha provoca inevitablemente el desorden y el desorden provoca más injusticia todavía, no resiste un examen histórico por poco objetivo que sea.

La lucha contra la esclavitud no ha provocado más injusticia que la esclavitud. La lucha contra la servidumbre no ha provocado más injusticia que la servidumbre. La lucha contra la Inquisición, la tortura, la muerte en la hoguera de presuntas brujas no ha provocado más injusticias que estas abominaciones. Podríamos prolongar la lista sin dificultad.

El fin emancipador que nosotros formulamos no es un fin abstracto, al margen de la historia real. Es un fin que corresponde a un movimiento histórico real, aun cuando aparezca en cierto modo en el entramado de la historia de una manera intermitente, a largo plazo, a menudo de manera contradictoria, con progresos a veces graduales, a veces repentinos, seguidos de retrocesos a veces pequeños, otros importantes. Pero el movimiento a largo plazo ha dado resultados indiscutibles. Los ejemplos que acabamos de mencionar nos remiten a ellos. No hay razón alguna para suponer que no pudiese ocurrir lo mismo en el futuro, por más que la decepción, el desconcierto y la desmoralización no sean consideradas razones.

Finalmente, y ésta es, con mucho, la razón más importante a favor del intento de luchar por la emancipación generalizada: el mal menor se considera cada vez menos como un «bien», cada vez engloba situaciones no sólo alienadas, sino también alienantes. Cada vez se asocia más con una barbarie creciente, con catástrofes que asoman en

el horizonte, que constituyen una amenaza para la supervivencia del género humano.

Es mucho más utópico cerrar los ojos ante estas amenazas que tratar de combatirlas cuando todavía se está a tiempo. Nada más inhumano que cultivar el propio huerto y decir a los/las desheredados/as (millones de seres humanos): «Id a sufrir a otra parte»<sup>1</sup>. Nada más irracional que esperar que la lluvia radiactiva o las consecuencias del «efecto invernadero» den un rodeo para no pasar por «mi huerto».

Sin duda, el balance del siglo XX no es un balance de fracaso puro y simple de la economía capitalista y de la economía burocráticamente dirigida. Ambos sistemas pueden atribuirse algunas realizaciones importantes. El primero, en lo fundamental, la satisfacción de las necesidades de consumo de calidad para una minoría que podría estimarse entre un 15-20 por 100 de los habitantes del planeta. El segundo, en lo fundamental, hasta fines de la década de 1970, la satisfacción de las necesidades alimentarias de aproximadamente otro 15-20 por 100 de los habitantes que antes no podían satisfacerlas bajo el régimen capitalista<sup>2</sup>.

Pero es preciso señalar que en el curso de los últimos quince años estas realizaciones comenzaron a ser cada vez más dudosas por la política de austeridad impuesta en los países capitalistas y por la crisis sistémica del Este. Numerosos índices permiten prever que esto se agravará todavía más en la década que tenemos por delante.

Sobre todo, los dos sistemas se muestran incapaces, desde el punto de vista estructural, de hacer frente a las catástrofes que se preparan: amenazas de armas nucleares, biológicas y químicas; amenazas de contaminación nuclear; amenaza ecológica; aumento del hambre y de las epidemias, primero en el «Tercer Mundo» y de una manera progresiva y creciente en el hemisferio norte.

<sup>1</sup> En un hermoso ensayo dedicado al cuadro del pintor Géricault «Monómano del vuelo», el escritor inglés John Berger escribió: «Entre la experiencia concreta de la vida ordinaria sobre nuestro planeta y los relatos populares concebidos para dar un sentido a esta vida, los pozos y los abismos están hoy totalmente abiertos. En ellos habita la desolación, mucho más que en los hechos. ¿Acaso no es por eso que un tercio de la población francesa se muestra dispuesta a escuchar al señor Le Pen?...

La mayor parte de las revoluciones, a lo largo de toda la historia, han tenido como finalidad restablecer una justicia olvidada o despreciada desde hace tiempo. La propia Revolución Francesa llegó incluso a proclamar el principio universal de un porvenir mejor. A partir de ese momento, los partidos políticos, tanto de izquierdas como de derechas, se han visto obligados a prometer que se reduciría la cantidad de sufrimiento en el mundo, y que se reduciría de una manera progresiva. Desde entonces, toda desdicha se convirtió, en cierta medida, en la evocación de una esperanza. Todo dolor podía ser parcialmente trascendido por el hecho de ser sentido como una incitación a hacer renovados esfuerzos con miras a construir un porvenir en el cual dicho dolor ya no existiese. La desdicha encontró una salida histórica...

En la actualidad, las promesas han perdido todo crédito. Vincular este descrédito solamente a la «caída del comunismo» revelaría una falta de clarividencia. Los fenómenos actuales, en los cuales los bienes de consumo reemplazan al porvenir en cuanto esperanza, son de un alcance mucho mayor. Una esperanza forzosamente condenada al descrédito para los clientes que la suscriben y que, en virtud de una inexorable lógica económica, excluye a las grandes masas mundiales» (*Le Monde Diplomatique*, diciembre 1991).

<sup>2</sup> En 1917 había en la Rusia zarista menos de tres millones de alumnos en la enseñanza primaria, menos de un millón en la secundaria. En 1964 había 25 millones de titulados de la enseñanza secundaria, y en 1989, 125 millones. En 1959, 3,8 millones de soviéticos tenían diplomas posuniversitarios; en 1978 eran 14,8 millones (frente a menos de 100.000 en 1917).

Igualmente indudable es que ni la economía capitalista ni la economía llamada dirigida funcionan hoy en día en estado puro. La economía capitalista realmente existente está lejos de ser una economía de mercado tal como se la describe en los manuales. Es una economía en cuyo seno se combinan monopolios y oligopolios, mecanismos de atenuación de las crisis por la intervención de los poderes públicos, fuerza relativa del movimiento obrero organizado y del movimiento de liberación en los países del «Tercer Mundo» para determinar la dinámica económica inmediata y a medio plazo, muchas veces en contradicción con las «leyes del mercado».

De manera análoga, en el seno de la economía dirigida, los mecanismos de planificación se combinan con la supervivencia de mecanismos de mercado y del papel del dinero, y sobre todo con el poder que tienen los altos cargos burocráticos para defender y ampliar sus privilegios, independientemente de los costes que esto acarrea para la sociedad en su conjunto. De este modo, la semiplanificación societaria se ha caracterizado desde el comienzo por desproporciones colosales, especialmente por el subdesarrollo crónico del sector llamado de servicios que ha terminado por estrangular en gran medida los efectos estimulantes de la utilización centralizada de los recursos.

Pero al examinar los problemas del desarrollo socioeconómico a largo plazo, la cuestión de la «pureza» del sistema cede el paso al asunto de su lógica inmanente, es decir, de sus leyes de desarrollo (*laws of motion, Bewegungsgesetze*, para utilizar palabras de Marx).

A este respecto, hay datos suficientes de carácter empírico para demostrar que la economía capitalista «realmente existente» sigue dominada por el imperativo del beneficio de las empresas individuales y, por tanto, de la competencia. Esto desemboca inevitablemente en fluctuaciones económicas periódicas y en el empobrecimiento periódico de todos/todas aquellos/aquellas que no deciden las inversiones importantes porque no controlan los principales medios de producción y de intercambio.

También se caracteriza por una tendencia a la concentración y a la centralización progresivas del gran capital. Setecientas multinacionales dominan una parte considerable del mercado mundial<sup>3</sup>. Su número se reducirá aún más en los años venideros. Es ilusorio creer que no hay interferencias entre este poder económico colosal concentrado en unas cuantas manos y la esfera política, y son interferencias que se pueden situar principalmente en el ámbito de los medios de comunicación.

Hay una paradoja evidente en esto de señalar un punto de coincidencia entre la economía socialista y la economía capitalista. No podemos sustraernos a ella afirmando que no hay ya una economía capitalista «pura», sino una economía llamada «mixta». Si se la examina atentamente se observa que es una economía que evoluciona según las leyes del desarrollo del capitalismo, aunque sólo sea de manera un tanto atenuada.

Los que están convencidos de que no hay una solución que pueda reemplazar a la economía de mercado generalizada deberían tener el valor de reconocer que ya no hay alternativa «capitalismo o socialismo», que el modo de producción capitalista constituye de ahora en adelante el único sistema económico posible, tal como lo proclaman a voz en cuello los neoconservadores. La única función de los socialistas sería la gestión acertada de este capitalismo que es «el único posible», así como un reparto más equitativo de sus frutos<sup>4</sup>. Esta paradoja tiene implicaciones políticas muy peligrosas tanto para el porvenir del movimiento socialista como para el de las libertades democráticas.

La gestión «eficaz» de un capitalismo que desde hace más de quince años no tiene un crecimiento suficiente ni lo tendrá en los años venideros, lleva a políticas de austeridad que chocan frontalmente con los intereses de los/as asalariados/as y producen bolsas de pobreza, de «marginados/as», cada vez mayores en las grandes ciudades. La ausencia de una opción real entre dos modelos de sociedad, acentúa la despolitización, la frustración política, mina la legitimidad de las libertades políticas y favorece la aparición de tendencias de ex-

<sup>3</sup> La CNUCED publicó un estudio interesante sobre esto relativo al sector de fibras y textiles: *Dimensions du pouvoir des sociétés transnacionales*, Naciones Unidas, 1981.

La CTC (Centro de Estudios de las Sociedades Transnacionales de las Naciones Unidas) publicó en julio de 1991 un estudio donde se indicaba que entre 1983 y 1989, las inversiones en el extranjero de las multinacionales han crecido una media de 28,9 por 100 por año, para llegar a 200.000 millones de dólares en 1989. El total de sus inversiones extranjeras asciende a un billón y medio de dólares. Durante el mismo período, las exportaciones mundiales han aumentado de 7,8 a 9,4 por 100 del PNB mundial (en dólares actuales, es decir, sin deducción del efecto de la inflación).

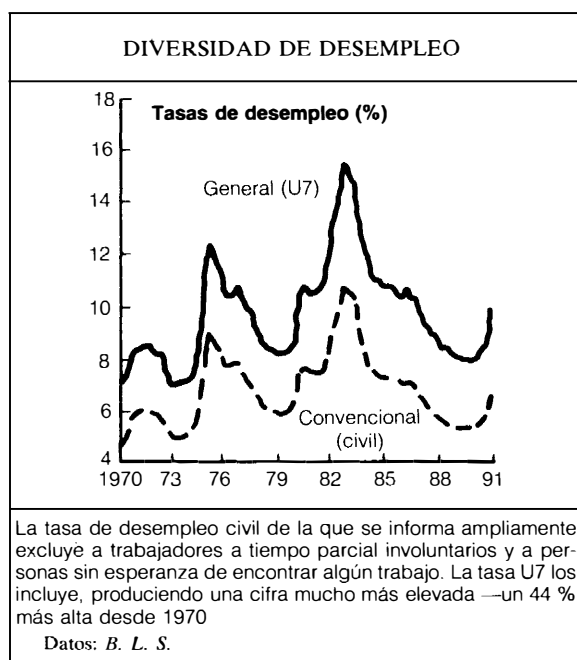
<sup>4</sup> Esta tesis es defendida, en especial, por Włodzimierz Brus y Kamimierz Laski (*Von Marx zum Markt*, Metropolis Verlag, Marburg, 1990), quienes sacan la conclusión lógica de que un capitalismo de este tipo debe basarse en la propiedad privada de los medios de producción.

trema derecha, racistas y xenóforas, incluso abiertamente neofascistas. Es irrealista tratar de combatir estas tendencias con reacciones esencialmente propagandistas, pedagógicas e ideológicas, por necesarias que sean. Ya Einstein había proclamado que era imposible combatir eficazmente el fascismo sin eliminar el desempleo. Pero el desempleo se dispara con las políticas de austeridad.

El número real de parados/as en las grandes ciudades se acerca en la actualidad más a los casi 30 millones que a las cifras que proporcionan las estadísticas gubernamentales. En éstas se suprimen los parados parciales y los que, según el eufemismo oficial, «se retiraron voluntariamente del mercado del trabajo», porque han perdido la esperanza de encontrar un empleo.

La diferencia entre el desempleo oficial y el real está claramente indicada por las dos curvas reproducidas más abajo, que hacen referencia a los Estados Unidos y que han sido proporcionadas por el organismo oficial *Bureau of Labor Statistics*:

GRÁFICO 1



El desempleo parcial tiene como consecuencia un descenso de la remuneración que representa al-

rededor del 50 por 100 en relación con las personas que trabajan jornada completa en los Estados Unidos. Y ha pasado del 16 por 100, en el conjunto de la economía no agrícola, en 1969, al 23 por 100, en 1989.

Durante la recesión en curso, el desempleo real podría llegar a alcanzar, o incluso a rebasar, la cifra de 40 millones en las grandes ciudades. Eso sin hablar del «Tercer Mundo», donde el desempleo afecta a cientos de millones de seres humanos. También allí, el ascenso de todos los integristas sólo puede entenderse a la luz de esta realidad social. Y este ascenso podrá frenarse únicamente en la medida en que se elimine esta lacra social del paro.

Por otra parte, la identificación de una economía socialista con el Estado Providencia alimenta la rebelión popular contra la gestión paternalista y burocrática de la seguridad social y alimenta la campaña reaccionaria contra ésta <sup>5</sup>.

En términos más generales, el rechazo de la lógica de la autogestión y de la autoadministración en favor de la utilización del Estado como instrumento prioritario de progreso social hace que se endose a los socialdemócratas la responsabilidad de prácticas de carácter represivo que afectan a los derechos humanos. Recientemente, el Gobierno de los Países Bajos con participación socialdemócrata organizó la deportación forzosa de judíos soviéticos por considerarlos «inmigrantes ilegales».

De manera análoga, en la economía llamada dirigida, son en última instancia el poder y los privilegios de los altos cargos de la burocracia los que controlan el fin último de las decisiones en materia de inversión y los que implican la ausencia de estímulos para un empleo globalmente más racional y menos despilfarrador de los recursos disponibles. Así pues, la eliminación de los dos sistemas, su reemplazo por un sistema cualitativamente superior (no ideal, sino cualitativamente superior) es, pues, deseable y necesario a la vez.

Es necesario, porque sin este reemplazo no se evitarán las catástrofes, como lo demostraremos más adelante.

Es deseable porque en los dos sistemas el ser humano, la humanidad toda, no es libre de determinar su propio destino, porque los dos sistemas se oponen a una extensión y a una generalización

<sup>5</sup> El diputado socialdemócrata neerlandés Erik Jurgens señala con decepción: «La legislación sale, en un 95 por 100, de la devanadera burocrática, aun cuando se piensa que la Cámara [el Parlamento] participa en las decisiones, el presupuesto funciona más como una directiva interna de las autoridades que como un instrumento parlamentario; la Asamblea sigue de una manera servil el orden del día tal como lo ha establecido el Gobierno... Se consideraría como algo muy curioso que los diputados pudiesen simplemente discutir y decidir entre ellos, independientemente del Gobierno» (*NRC/Handelsblad*, 21 de diciembre de 1991).

de los derechos del ser humano a los ámbitos social y económico. Los dos sistemas están basados en el dogma de las fatalidades que limitan la libre elección de los seres humanos. Es el dogma de la maximización del crecimiento, la función de la maximización de las inversiones, de los ideólogos estalinistas/postestalinistas. Es el dogma de la eficacia económica a corto y medio plazo, de los ideólogos neoliberales y los socialdemócratas que les cierran el paso.

Dejemos de lado la cuestión de saber si estos dogmas tienen una base empírico-científica real. Tenemos grandes dudas a este respecto. Pero aunque así fuera, ambos pretenden limitar de manera inadmisiblemente la libertad de elección de los productores, consumidores, ciudadanos. Se considera que las pretendidas «leyes objetivas» que se cargan sobre las espaldas de los hombres y las mujeres, independientemente de la voluntad expresada democráticamente, son insuperables. Nosotros rechazamos estas dos posturas dogmáticas, como contrarias a la extensión y a la generalización de los derechos humanos. Es preciso revelar lo que tienen en común. Como el estalinismo/neoestalinismo y el neoliberalismo/neogradualismo (cada vez menos reformistas) son plantas venenosas que brotan en un terreno común: la utopía reaccionaria según la cual unos cuantos «expertos», «élites» o «dirigentes omniscientes» tienen el derecho, y deben tener el poder para hacer felices a las personas a pesar y en contra de ellas mismas. A esta arrogancia de los privilegiados nosotros los socialistas/comunistas demócratas y marxistas oponemos el derecho de los productores/as, de los consumidores/as y de los ciudadanos/as a determinar libremente su propio destino.

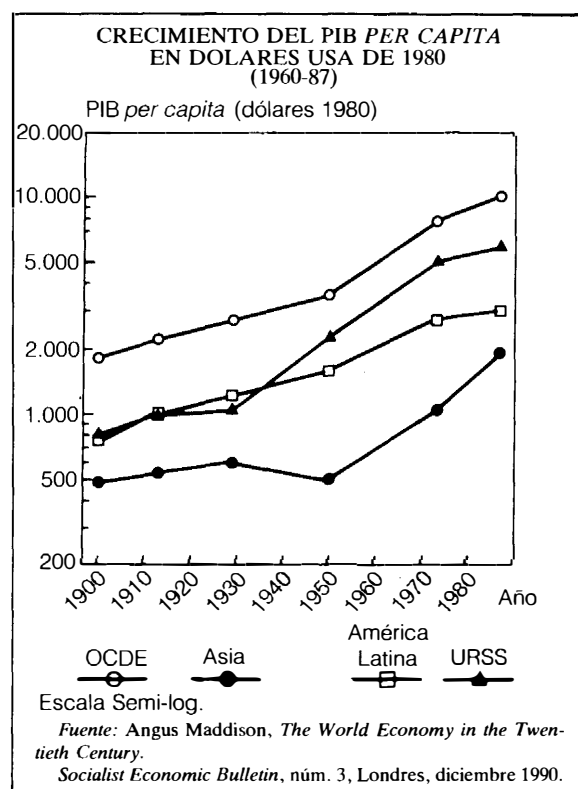
#### El aumento de la pobreza en el mundo

El aumento de la pobreza en el mundo —junto con el deterioro de las condiciones ecológicas— confirma en cierto modo el fracaso de los dos sistemas económicos en dar respuesta adecuada a los retos mundiales con los cuales se enfrenta la humanidad.

El agravamiento de la pobreza del Tercer Mundo es el más alarmante. Según el *Development Report 1990* del Banco Mundial (Nueva York, Oxford University Press), mil millones de seres humanos vivirían en condiciones de pobreza en el

Tercer Mundo. Pero esta estimación parte prácticamente de la idea de que sólo aquellos que están subempleados (los/las que no trabajan o lo hacen sólo en el sector no reglamentado) son considerados pobres. Si incluimos entre los pobres a aquellos/aquellas que tienen pleno empleo pero unos salarios de hambre<sup>6</sup>, la cifra citada debería aumentarse como mínimo en un 50 por 100, si no más. El «umbral de pobreza» utilizado es el de 370 dólares por año —es decir, lo que es compatible con una tasa de plusvalía suficientemente alta como para estimular la acumulación acelerada de capital en los países en vías de desarrollo—.

GRÁFICO 2



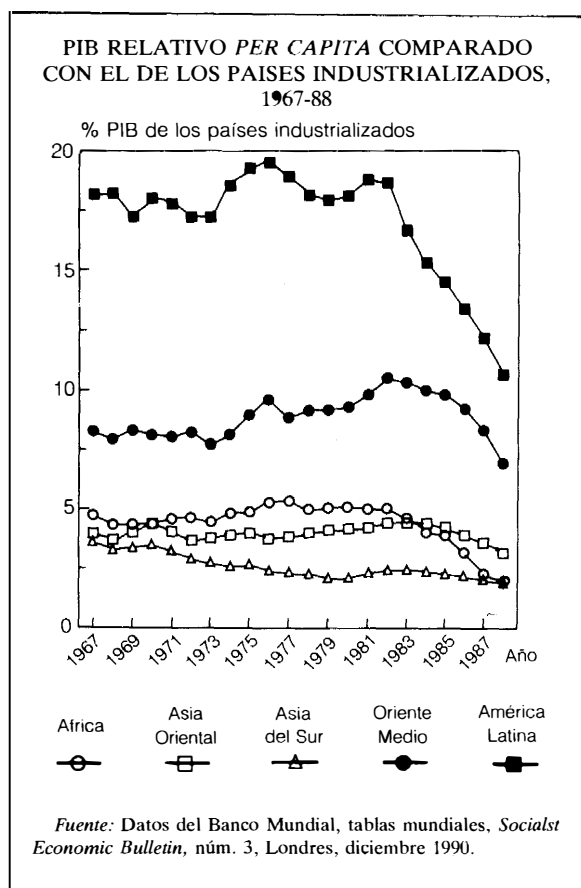
Tomemos como ejemplo a la India. Estimaciones realistas evalúan el número de pobres en este país en 280 millones de personas, es decir, el 40 por 100 de la población. Las estadísticas indias oficiales van más allá al introducir la distinción entre «pobres» y «superpobres», calculando que los primeros eran 255 millones en las zonas rurales en 1983, y los segundos 160 millones. Los primeros consumen 50 rupias (3 dólares) por mes, y los se-

<sup>6</sup> «Las multinacionales japonesas transfieren buena parte de sus actividades a Malaisia y a Tailandia, donde los salarios diarios son de 3 dólares» (*Le Monde Diplomatique*, septiembre de 1991), o sea, que equivalen aproximadamente al 3 por 100 de los que se pagan en los países más ricos.

gundos menos de 40 (N. Kakwani-K. Subbaran: «Rural Poverty and its Alleviation in India», *Economic and Political Weekly*, 31 de marzo, 1990).

En el período 1980-1988, 62 países en los cuales viven más de 800 millones de personas han experimentado un descenso absoluto de su PNB *per capita*. Por lo que respecta a la brecha entre el PNB *per capita* de los países del Tercer Mundo y el de las metrópolis, se ha ampliado prácticamente en todos los países a excepción de Taiwan, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong.

GRÁFICO 3



El aumento de la pobreza en el Tercer Mundo viene acompañado de fenómenos clásicos de incremento del trabajo de las mujeres y de los niños por salarios de hambre. Según afirmaba la UNICEF el 20 de septiembre de 1991, con ocasión del Día Internacional del Niño, doscientos millones de niños trabajan en estas condiciones en todo el mundo. En la India esto significa, por ejemplo, que un niño de ocho años trabaja doce horas por día en el noroeste del país transportando ladrillos (20 kg por paquete, unos 1.000 ladrillos al día).

Se estima que en la Unión Soviética, el número de pobres antes de la era Gorbachov era de 60 millones. Desde entonces, esta cifra ha aumentado considerablemente.

En las metrópolis, si bien el aumento de la pobreza ha sido menos espectacular, no por eso es menos real. Según el *Joint Center for Political and Economic Studies* de los Estados Unidos, el índice de pobreza habría sido del 18,1 por 100 de la población en los Estados Unidos en 1985, frente al 13,9 por 100 en Canadá, el 12,5 por 100 en Gran Bretaña, el 9,9 por 100 en Francia, el 7,6 por 100 en los Países Bajos, y el 7 por 100 en la República Federal de Alemania. Para el conjunto de los «países ricos», esto ya equivale a 100 millones de pobres. Y estas cifras deben haber aumentado desde entonces. Pero si se tienen en cuenta diferencias específicas, condiciones de pobreza próximas a las del Tercer Mundo también se encuentran en todas las grandes ciudades. Baste pensar en los *ghettos* de Nueva York y Londres y en los suburbios de París. El semanario alemán *Die Zeit* (10-5-1991) afirma con razón que en el Estado más pobre de los Estados Unidos, Mississippi, las condiciones se aproximan a las de los países subdesarrollados. Un pueblo como Mayersville no tiene escuela; el distrito de Issaquena, en el cual está situado, no tiene ni hospital ni médico y la mayor parte de sus habitantes no ha conocido jamás viviendas con agua corriente ni con cuarto de baño.

En Gran Bretaña, el Gobierno ha accedido por fin, especialmente bajo la presión del *Institute for Fiscal Studies*, a revisar las estadísticas relativas al umbral de pobreza. Lo cierto es que desde 1987, 7,7 millones de personas tienen una renta inferior en más del 50 por 100 a la renta media por persona activa, cifra que en 1981 era de 4,4 millones. Desde entonces la situación se ha agravado sensiblemente (*The Guardian*, 14 de diciembre de 1991). Una conclusión se impone: es necesario otro sistema económico para eliminar la pobreza.

## II. EL OBJETIVO

Dentro de un futuro previsible, no conoceremos la economía de la abundancia, es decir, de satisfacción de las necesidades racionales para todos los habitantes del planeta. En estas condiciones, todo sistema socioeconómico debe resolver el problema del reparto de unos recursos relativamente escasos. Como quiera que todo abanico de recursos destinados a la producción de ciertos bienes y servicios redundará automáticamente en la escasez

de dichos recursos para la producción de otros bienes y servicios, la diferencia entre sistemas económicos equivale en última instancia a la diferencia de los mecanismos que determinan esta elección de prioridades.

Por lo que respecta a la «economía de mercado», no se duda en afirmar que estas prioridades están determinadas por las «leyes del mercado», es decir, por la ley de la oferta y la demanda, y que reflejan, en última instancia, las preferencias de los consumidores. Pero esta argumentación no es un reflejo de la realidad de la economía de mercado que realmente existe, es decir, de la economía capitalista.

En el seno de ésta, el perfil de la oferta está en gran medida sobredeterminado por la iniciativa de la inversión de las grandes empresas.

Es cierto que éstas no son todopoderosas, que no pueden hacer que cualquier número de consumidores compre cualquier producto. Pero de todos modos disponen de un gran margen de autonomía. Si deciden producir el producto X en gran escala, se produce. Si han tomado una decisión de inversión no sancionada por el mercado, decenas de miles, incluso centenares de miles de empleos, serán suprimidos con todas las consecuencias sociales nefastas que ello implica, sin que las víctimas hayan tenido la menor responsabilidad en este error de juicio.

A su vez la demanda no es una demanda «pública», indiferenciada. Es una demanda de consumidores con un poder adquisitivo y una riqueza sumamente desigual en la medida en que la demanda orienta o reorienta la oferta, lo hace en función de estas disponibilidades desiguales.

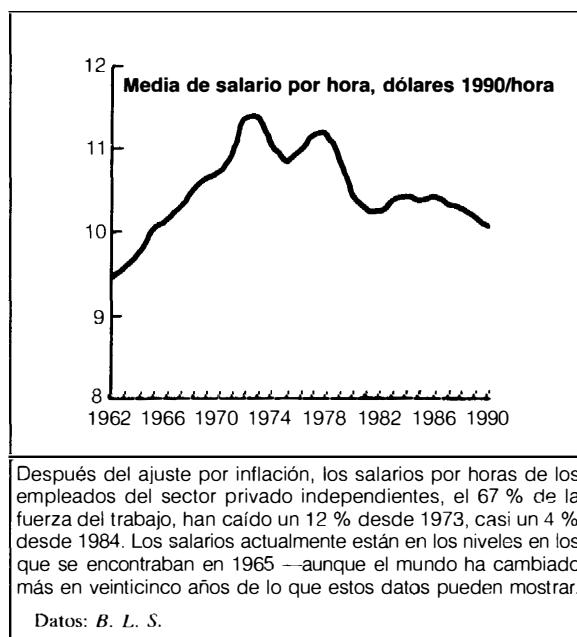
Esto quiere decir concretamente que se construirán «segundas residencias» mucho antes de que se satisfagan las necesidades de una vivienda digna para todas las familias. Esto quiere decir que se fabricarán productos de gran lujo e incluso productos perniciosos (como las armas, las drogas, el tabaco) mientras que millones de seres humanos no tienen lo suficiente para comer o no reciben una atención sanitaria mínima. En suma, las prioridades en el empleo de los recursos relativamente escasos en la economía capitalista están determinadas por las leyes del beneficio y las desigualdades de renta y de fortuna. Tienen tendencia a reproducir y a aumentar estas desigualdades. Desembocan en injusticias sociales flagrantes. Nos gusta proclamar que «la lucha de clases está superada». Los hechos dicen otra cosa.

Tomemos el ejemplo de la República Federal de Alemania: la parte de los ingresos salariales en

la renta *per cápita* ha pasado del 65,6 por 100 en 1981, al 59,3 por 100 en 1989. Desde 1973, la propiedad no inmobiliaria de la población casi se ha duplicado, pero la de los obreros es apenas de 15.300 DM *per capita*, la de los empleados de 23.700 DM. En cambio, 700.000 unidades familiares poseen entre 500.000 y 1.000.000 de DM, un 0,06 por 100 de unidades familiares disponen de más de 50 millones de DM cada una. Las rentas de propiedad se han elevado en 1990 a 136.000 millones de DM, nueve veces más que en 1960.

Por lo que respecta a los Estados Unidos, los salarios por hora reales en el sector privado prácticamente han bajado de una manera constante desde 1973:

GRÁFICO 4



Pero el 1 por 100 de los contribuyentes más ricos (los que ganan por término medio unos 660.000 dólares por año) se ha enriquecido enormemente gracias a las reducciones fiscales de Reagan.

Entre 1982 y 1987 la fortuna de las 400 familias más ricas de los Estados Unidos se ha acrecentado en un 15 por 100 por año en dólares constantes, mientras que los haberes de las unidades familiares sólo han aumentado un 5 por 100 y los salarios por hora han sufrido una reducción del 0,1 por 100 por año.

Las prioridades así zanjadas son también económicamente irracionales porque sacrifican sistemáticamente un desarrollo económico óptimo a largo plazo a las ganancias inmediatas para peque-

ñas minorías, sea cual sea el precio que la humanidad en su conjunto haya de pagar por ello. Tratar de reducir este costo exorbitante sin afectar al mecanismo fundamental del sistema es irrealista e incluso contraproducente. Esta afirmación puede ser confirmada por dos de los fenómenos más acuciantes a los que se enfrenta la humanidad. En el campo ecológico, de la salvaguarda del «medio ambiente», la lógica del capitalismo responde al empuje de la «toma de conciencia ecológica» tratando de cobrarse los costes externos y hacérselos pagar a quien contamina. Nueve de cada diez veces se trata de grandes empresas que acaban trasladando estos costes a los consumidores. Por otra parte, la «lucha contra la contaminación» ha proporcionado a las empresas capitalistas la posibilidad de producir y de vender nuevos productos.

Pero la contradicción esencial no está ahí. Es evidente que la finalidad no debe ser pagar por la contaminación, ni limitarla un poco, sino suprimirla. Pero mientras las empresas capitalistas vean en ella un beneficio, esta supresión es irrealizable. Un sistema regido por el ansia de enriquecimiento a corto plazo y por el poder de los capitalistas para saciarla, es un sistema que no puede suprimir estas prácticas.

El profesor Barry Commoner escribe: «Sabemos actualmente que la tecnología moderna, en manos privadas, no puede sobrevivir si destruye el bien social del que depende: la ecosfera. De ahí que un sistema económico basado fundamentalmente en transacciones privadas más que sociales, ya no es apropiado y es cada vez más ineficaz para administrar este bien social.»

Pierre Cresson y Norman Rosenberg, vinculados a las Naciones Unidas, escriben en *Scientific American* (septiembre 1989): «El mercado no está bien equipado para proteger recursos tales como el agua y la diversidad genética, con respecto a los cuales es difícil establecer derechos de propiedad.»

El informe «Nuestro Porvenir Común», de 1986, de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo, reconoce que «las instituciones económicas y políticas existentes no han podido y probablemente no puedan resolver el problema del agotamiento de los recursos y de la presión sobre el medio ambiente». Y agrega: «La crisis ecológica sólo podrá resolverse si los individuos actúan llevados por el interés común..., pero con la expansión de la producción para el mercado se les ha dejado sin las responsabilidades relativas a la toma de decisiones.»

Se podría continuar hasta el infinito la lista de citas sobre la cuestión. Pero pocas veces se formula la conclusión de una manera clara: para resolver la crisis ecológica es necesario un sistema diferente del basado en la propiedad privada de los medios de producción y la producción esencialmente para el mercado.

En el ámbito del derecho a la vida y de su protección no hay más que ver la terrible desigualdad ante la enfermedad y las oportunidades de supervivencia que sigue vigente hoy en día, tanto entre los países «ricos» y los países «pobres» como entre los ricos y los menos favorecidos de los países llamados «ricos».

Según un estudio del INSEE (*Première*, núm. 158, agosto 1991) de Guy Desplanques, que ya había tratado esta cuestión en 1984 («L'inégalité sociale devant la mort», *Economie et Statistique*, núm. 162, enero 1984), en Francia, un profesor o un ingeniero entre treinta y cinco y cincuenta años tienen, por término medio, una esperanza de vida de cuarenta y cinco años más, mientras que la de un peón es inferior a los treinta y seis años. La diferencia de mortalidad entre los extremos de las categorías sociales es de 1 a 4 entre los treinta y cinco y los cincuenta años. Después de los profesores y los ingenieros vienen los cuadros administrativos superiores, las profesiones liberales, los técnicos y los cuadros medios, a continuación los artesanos, los comerciantes, los agricultores y los empleados y, por último, en el extremo inferior de la escala, los obreros y los asalariados del campo.

Incluso en los Estados Unidos, un inusitado estudio gubernamental, que data de 1986, establece las tasas de mortalidad debida a las enfermedades cardíacas en 37 por cada 10.000 personas para los cuadros superiores, directores, profesiones liberales, etc., y en 86 por cada 10.000 para los obreros manuales.

Sobre todo hay una lógica infernal que consiste en aplicar a los problemas de supervivencia y de la salud (al igual que a los de la educación y de la cultura) las técnicas de evaluación monetaria y de los costes comparados, así como el análisis de la relación *coste-beneficio*. Se evalúa el «valor de la salud», incluso de la supervivencia de un ser humano, sobre la base de la capitalización de su lucro cesante. Ciertas implicaciones resultan tan grotescas como odiosas: ¿Cómo evaluar, por ejemplo, el «valor de la salud» de un bebé cuya profesión e ingresos futuros no se conocen?

O bien estamos ante ejercicios puramente académicos, con lo cual el interés es prácticamente nulo. O bien estos cálculos sirven lisa y llanamente



te para tomar opciones de prioridad que aparentemente guiarán a los poderes públicos en la elección de las limitaciones y de las restricciones de los gastos en materia de atención sanitaria. Así atentan contra los derechos humanos más elementales. Recordemos, por ejemplo, que la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, de carácter marcadamente burgués, proclamaba como derechos inalienables para todos los seres humanos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El derecho inalienable a la vida no está asegurado si no se aseguran los medios materiales para asegurárselo a un gran número de individuos. Un sistema socioeconómico más justo que el sistema capitalista es un sistema que asegura a todos la satisfacción prioritaria de ciertas necesidades básicas, por ejemplo: la alimentación básica, los vestidos indispensables, una vivienda digna con un mínimo de comodidades, salud y educación y el libre acceso a un mínimo de bienes y de servicios culturales.

Esta lista no es ni exhaustiva ni definitiva. Su definición debe ser democrática, coherente, hecha a sabiendas, es decir, hecha por ciudadanos bien informados. Esto implica el empleo de una porción de los recursos de que actualmente se dispone por la libre elección *a priori* de los hombres y de las mujeres, y no por mecanismos de mercado/monetarios.

Esta elección de las prioridades reduce los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de ese 25 por 100 del que ya hemos hablado antes. Nosotros estimamos que se trata de un derecho positivo, inalienable, que deben conquistar todos los seres humanos. Una economía socialista es cualitativamente superior a la economía capitalista en la medida en que garantiza el disfrute de este derecho para todos. *Reemplaza en todos los ámbitos el principio de la maximización del beneficio por el principio de la satisfacción de las necesidades.*

Se ha objetado que en esta sustitución está latente un aumento de los costes. El 25 por 100 corre el riesgo de convertirse en un 30, 35 ó 40 por 100. Se corre el riesgo de que se agoten los recursos disponibles para las inversiones que aumentan la productividad del trabajo a largo plazo, de que decaiga la tasa de crecimiento. De esta forma, lo que se socializaría sería la miseria generalizada. La demostración es difícilmente sostenible ante las reservas colosales de recursos derrochadas en el mundo de hoy en día, sin hablar del enorme potencial de acrecentamiento de la productividad del trabajo, liberado a la vez por la ter-

cera revolución tecnológica y por unos productores por fin dueños de su suerte.

Pero aun cuando la objeción estuviese materialmente bien fundada, seguiría siendo social y moralmente inaceptable. Presupone, en efecto, que «la eficacia económica» brinda las bases para un sistema socioeconómico más humano que la satisfacción de las necesidades básicas para todas y todos. Presupone, en el mejor de los casos, que las injusticias sociales basadas en la desigualdad, tenderían a reducirse poco a poco.

Toda la experiencia histórica desmiente estas afirmaciones. No hay más que ver la magnitud de la miseria del «Tercer Mundo» y la reaparición a gran escala de la «sociedad dual» y de la «nueva pobreza» en el hemisferio norte, para llegar a la conclusión de que la hipótesis según la cual el traslado de los beneficios financieros (*trickling down*) refleja tanto ignorancia como cinismo.

En la economía dirigida, las prioridades en el empleo de los recursos relativamente escasos están determinadas, en última instancia, por elecciones arbitrarias de la cúpula de la burocracia, que se cree infalible.

La burocracia exagera sus competencias y sus capacidades. Su camino está sembrado de innumerables elecciones erróneas, cuyo ejemplo más catastrófico es el de la colectivización obligada de la agricultura bajo el gobierno de Stalin.

Sin un sistema equilibrado de democracia socialista política, de planificación central y de utilización de los mecanismos de mercado y de una moneda estable para corregir las desproporciones que en sí mismas son inevitables, no se concibe ningún sistema económico superior. Trotsky ya lo comprendió y formuló así en 1932.

El sistema capitalista desembocó en el despotismo de los ricos en lo que se refiere a la elección de las prioridades socioeconómicas. El sistema de la economía dirigida está basado en el despotismo arbitrario de los altos cargos del aparato del Estado (con los cuales se fusionan los altos cargos del aparato del partido-Estado). El sistema económico socialista está basado en la elección consciente *a priori* de estas prioridades por una democracia de productor(ra)/consumidor(ra)/ciudadano(na) libremente asociado(da). En este sentido, es social y humanamente superior al sistema capitalista y a la economía dirigida. Estamos convencidos de que también es económicamente más eficaz, por lo menos a largo plazo. Pero es y será necesario demostrarlo en la teoría y, sobre todo, en la práctica.

### III. LAS PRINCIPALES DIMENSIONES DE LA EMANCIPACION

Un sistema socioeconómico que permite garantizar un proceso real y progresivo de desalienación de los hombres y de las mujeres no puede conformarse con garantizar la satisfacción prioritaria de las necesidades elementales básicas. Debe resolver el problema de la dinámica económica a largo plazo. Debe proponerse la desaparición de las principales fuentes de alienación, de explotación, de opresión, de violencia generalizada.

Ya hemos evaluado anteriormente los recursos materiales y humanos globales que deben dedicarse como prioridad a las necesidades básicas del 25 por 100 de la totalidad. Pero a la vista de la imbricación de todos los sectores principales de la actividad tanto económicos como sociales, la relación de estos objetivos depende de las actividades cuantificables dentro de gran número de otros ámbitos.

Puesto que no se pueden producir viviendas con aviones a reacción, ni pequeños tractores con cohetes, ni vestidos con aparatos de televisión, ni viviendas con máquinas-herramientas, el empleo de un volumen excesivo de recursos materiales y humanos en estas cuatro categorías de productos corre el riesgo de implicar a largo plazo la creciente insatisfacción de las necesidades básicas, aun cuando la mayoría de los ciudadanos/as haya decidido dar prioridad a la satisfacción de las mismas. Así pues, hará falta un sistema de planificación democrática que garantice los insumos necesarios para realizar las prioridades elegidas de una manera libre y consciente. Los recursos necesarios para su realización deben ser sustraídos al reino del mercado capitalista o de una burocracia despótica.

Deben estar a disposición de la colectividad que es la que los debe asignar *a priori*. Esto se hace según métodos bien conocidos, utilizando las tablas de insumos-productos y los balances/materias y fuerza de trabajo, corregidos por coeficientes técnicos paramétricos (elección entre las diversas tecnologías de que se dispone).

Una planificación es democrática cuando los órganos en cuyo seno se toman las decisiones de

adjudicación (de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo del sistema económico) realmente son elegidos y aplican la regla del poder de la mayoría para decidir. Además, estas elecciones deben basarse en el pluralismo político, es decir, que deben dejar en manos de los electores la elección entre diversas variantes coherentes de prioridades (del plan).

Pero sobre la humanidad pesa una obligación suplementaria en el camino de la emancipación, y de la que apenas empieza a tomar plena conciencia: la obligación ecológica.

Envenenar la atmósfera, los océanos, los mares, los ríos, el subsuelo, contaminar la atmósfera; extender el «efecto invernadero»; derrochar recursos naturales escasos y no renovables, equivale a poner en peligro a la larga la supervivencia de la especie humana. Es minar en lo inmediato la calidad de vida de una manera que puede provocar el rechazo y la rebelión de gran número de víctimas.

También en este caso se trata de un volumen de recursos materiales y humanos cuyo empleo debe ser decidido democráticamente *a priori* por las personas interesadas, es decir, debe ser sustraído al despotismo del beneficio y del enriquecimiento por una parte y a la arbitrariedad de la economía dirigida por otra parte<sup>7</sup>.

Esto no significa que en estos ámbitos, una economía socialista no pueda utilizar mecanismos de mercado y prescindir de un cálculo económico comparativo en términos monetarios. Muy al contrario. En el caso de los bienes de consumo, el mercado, es decir, las decisiones de compra de los consumidores y sus efectos sobre los precios, por acción de la ley de la oferta y la demanda, corrigen las decisiones *a priori* en materia de adjudicación de recursos, incluso cuando éstas resultan de largas consultas previas entre productores/as y consumidores/as. Hay un *feedback* de estas correcciones en las ramas de la producción, y un reparto de este *feedback* entre las unidades de producción.

Los/las propios/as interesados/as decidirán en qué medida este reparto se hará de una manera competitiva o por consenso (con el riesgo de una nueva corrección por parte del mercado). Pero se trata de un *feedback* esencialmente microeconómico.

<sup>7</sup> El cálculo de los costes de los daños ecológicos, y con mayor razón la integración de los imperativos ecológicos en el cálculo de las prioridades de desarrollo económico, es un problema hasta ahora no resuelto por la teoría económica marxista ni por ninguna de las demás escuelas de teoría económica. Marx y Engels han señalado de manera general algunos enfoques al respecto. Sobre el conjunto de estos problemas véase especialmente Elmar Altvater: *Kritik der politischen Oekonomie am Ende des 20. Jahrhunderts*. Joan Martínez-Alier y Klaus Schlüpmann: *La Ecología y la Economía*, Fondo de Cultura Económica, México, 1991 (la versión original de este libro se publicó en alemán). Christian Leipert: *Die Heimlichen Kosten des Fortschritts*, S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1989.

mico, y no macroeconómico. El mercado se encontrará en la imposibilidad de influir, por no decir determinar, el volumen del empleo y las grandes líneas de desarrollo económico. No podrá ocasionar ni paro, ni disminuciones del consumo para la inmensa mayoría de la población. La condición técnica para que este sistema pueda funcionar en el nivel de la planificación central es que el sistema de balances-materias incluya reservas razonables, es decir, existencias estables, y no pretenda utilizar todos los recursos disponibles para la producción y las inversiones del momento.

Hace falta otro sistema de distribución y de transporte suficientemente extendido, transparente, no monopolista y bajo control público, para garantizar que la producción actual llegue normalmente y de una manera continua a las unidades de distribución y a los/las consumidores/ras.

Diversos autores como John Roemer oponen a estas reglas la idea de «socialismo de mercado». Esta idea parte del axioma de que el máximo de eficacia macroeconómica es la suma del máximo de eficacia de cada empresa considerada separadamente, y que el impulso hacia la maximización del beneficio por empresa asegura este máximo de eficacia económica. Pero este axioma no está ni demostrado teóricamente ni confirmado por la experiencia empírica (por la historia económica de los dos últimos siglos).

El propio Roemer se da cuenta de ello y corrige el imperativo de la maximización de beneficio por empresas separadas, insertándolo en un sistema de tipo japonés o surcoreano, donde el Gobierno y los grandes bancos (grupos financieros) influyen sobre las decisiones de las empresas no sólo por medio de unas tasas de interés fuertemente diferenciadas —su propuesta inicial—, sino también mediante decisiones de autoridad (y por definición, autoritarias)<sup>8</sup>.

La economía capitalista-monopolista del Japón como «modelo» de socialismo, es llevar la paradoja un poco lejos. ¿Qué contenido real pueden tener en estas condiciones la autogestión y el control obrero en el sentido de gestión obrera?

No nos apartaremos mucho de la realidad si afirmamos que esto presupone que entre un 50 y un 60 por 100 de los recursos disponibles sean sustraídos a las «leyes de mercado» (en términos mar-

xistas: que ya no estén regidos por la «ley del valor» o, lo que es igual, distribuidos entre sectores en función de esta ley). Por otra parte, los objetivos de una emancipación progresivamente generalizada que debe proponerse una economía socialista son pluridimensionales. Comprenden la desaparición de las fuentes principales de injusticia, de desigualdad, de opresión en el mundo real. Intentemos una vez más su enumeración, aunque no sea de una manera exhaustiva.

— La desigualdad norte-sur sólo puede reducirse de una manera sensible mediante una enorme redistribución de recursos entre los dos hemisferios. En vista de la magnitud de las reservas de recursos no empleados y derrochados a escala planetaria —basta pensar en el volumen total de los gastos militares— esta redistribución puede efectuarse sin una reducción del nivel de vida que actualmente disfruta el asalariado medio del hemisferio norte. Pero es irrealizable en un número reducido de países. Del mismo modo que la solución al problema de los peligros ecológicos, la del subdesarrollo exige la acción concertada de los principales países del mundo. Esto sólo puede lograrse sobre la base de la igualdad más estricta y de la puesta en práctica de los principios de solidaridad y de cooperación, incompatibles con el capitalismo, basado en el egoísmo de cortas miras y en el ansia del enriquecimiento privado.

— La desigualdad entre los sexos. La opresión y la sobreexplotación de las mujeres es la forma más antigua de la desigualdad social. Apenas se ha reducido sensiblemente en el curso de los últimos decenios. Su supresión no puede dejarse librada a la acción de la sociedad en su conjunto. Dependerá en gran medida de la organización y de la acción autónomas de las propias mujeres. La regla que las inspirará será la siguiente: no hay socialismo sin emancipación de las mujeres. No hay emancipación de las mujeres sin socialismo.

— La desigualdad, la discriminación y los odios nacionales, raciales, étnicos y religiosos. Estos fenómenos tienen una existencia de siglos, si no de milenios. Las sociedades de clase, igual que la sociedad dominada por burocracias conservadoras y nacionalistas, no han logrado eliminarlas. Es inconcebible una economía socialista en la cual

<sup>8</sup> La mayor parte de los comentaristas tienen una visión incompleta y, por tanto, falseada de las causas del alto rendimiento competitivo del capitalismo japonés. Este no es sólo el resultado de ciertos éxitos en el ámbito tecnológico y de economía de costes mediante formas específicas de organización del trabajo. También es el resultado de una «sociedad dual» institucionalizada desde hace tiempo, que incorpora un sector arcaico de trato inferior, en el que imperan condiciones de remuneración y de trabajo degradadas y (hasta ahora) desconocidas en Europa y en los Estados Unidos. La consecuencia es que, al revés de la leyenda, el poder adquisitivo medio de los/as asalariados/as en Japón es de un 35 a un 40 por 100 inferior al de la República Federal de Alemania y los Estados Unidos, e incluso inferior al de Francia, Bélgica, Italia y España (*Financial Times*, 1 de noviembre de 1991).

un individuo cualquiera sufra discriminación o reducción de sus derechos democráticos en función del color de su piel, de sus orígenes étnicos, de su nacionalidad, de su religión.

— La desigualdad entre los grupos de edad, es decir, ante todo para los jóvenes y los ancianos. La modificación de la estructura de edad en los países ya industrializados y la explosión demográfica en los países más pobres, la necesidad de asegurar por consentimiento y no por obligación la reducción de la tasa de crecimiento demográfico, exige un reexamen fundamental de las estructuras de toda la existencia individual. Esta reorganización es imposible fuera de un marco socioeconómico socialista.

— La estructura jerárquica de la actividad tanto productiva como administrativa. Es una de las causas principales de alienación en la sociedad capitalista y en el ámbito de la economía dirigida. Su abolición reclama un régimen de autogestión y de autoadministración reales, es decir, democráticamente articulado y planificado. La autogestión sólo dentro del nivel de la empresa o de un número reducido de empresas es una engañifa. Permite la subsistencia del reinado del mercado en la economía en su conjunto. Los autogestionarios serán, pues, «libres» de jubilarse, presionados por el mercado. ¡Menudo «socialismo»!

— El constreñimiento de los asalariados. Los asalariados están constreñidos a realizar trabajos forzados. El asalariado no trabaja para realizar su personalidad humana. Trabaja principalmente para obtener una renta, para adquirir los medios de consumo que se consideran necesarios para llevar una existencia normal. La separación entre los que controlan los grandes medios de producción y de intercambio y los que los producen implica la obligación de estos últimos de trabajar a destajo.

La obtención de este exceso de trabajo de los productores implica la necesidad de un control social sobre los asalariados, sobre todo en el seno mismo de la empresa, pero también en el ámbito social global. Este control refuerza aún más el carácter de forzado que tiene el trabajo.

Es preciso recordar que los asalariados, es decir el «mercado de trabajo», no puede funcionar realmente sin que la fuerza de trabajo se vea económicamente obligada a vender dicho trabajo por estar privada de acceso directo a los medios de producción y de subsistencia. Este hecho, confirmado por toda la experiencia histórica, fue comprendido mucho antes de Marx por ese gran ideólogo burgués —un tanto cínico— que fue Voltaire, quien escribió en el *Dictionnaire Philosophi-*

*que* de 1764, en la voz «Igualdad» (¡claro que sí!): «El género humano, según lo conocemos, no puede subsistir a menos que haya hombres útiles que no tengan nada de nada, ya que, indudablemente, un hombre que no tenga necesidad no abandonará sus tierras para venir a trabajar las vuestras, y si tenéis necesidad de un par de zapatos, no será un oficial judicial quien os los venga a hacer.» La idea de que un zapatero, propietario de sus medios de producción, pueda producir para que vosotros vendáis no tiene cabida en esta «sociedad civil» dividida entre burgueses y proletarios que no tienen nada.

Una decisión judicial tomada recientemente en Japón confirma de manera sorprendente este carácter no libre del trabajo. En ella se determina que un empleado puede ser obligado a realizar horas extraordinarias. Si se niega a obedecer puede ser despedido. Una economía socialista se define, ante todo, como una economía basada en la emancipación del trabajo, imposible sin la abolición de los asalariados. Es una economía autogestionada, no asalariada, en la cual el conjunto de los/las productores/ras decide de manera colectiva y democrática lo que ha de producir y cómo lo debe producir. Para esto se requiere una reducción radical de la jornada (semana) de trabajo, sin duda la media jornada de trabajo: de lo contrario los/las productores(as)/ciudadanos(as) no tendrán ni tiempo ni posibilidades materiales de ocuparse de sus propias cuestiones. Esto implica una desaparición progresiva de la división del trabajo entre productores/las y administradores/as, entre las funciones de acumulación y las funciones de producción en el sentido más amplio de estos términos.

— La asfixia del potencial creador. La división social del trabajo entre las funciones de acumulación y las funciones de producción es una división entre dirigentes y dirigidos, entre *bosses* y *bossed over people* como se dice en inglés. Esto tiene numerosas secuelas graves para los hombres y las mujeres que lo sufren, entre ellas secuelas psicológicas. Nadie es libre de determinar su actividad productiva ni es libre tampoco en lo que respecta al consumo y a los placeres, o al menos lo es de una manera muy limitada.

La consecuencia más grave de esta falta de autodeterminación de los individuos es la asfixia de su potencial creativo. Las relaciones sociales en las cuales están insertos no permiten que se realice este potencial. Se ha dicho hasta el cansancio: millones de Mozart potenciales quedan así eliminados. No limitemos el potencial creativo de la mayoría de los hombres y de las mujeres en los ámbitos extraeconómicos. Este potencial creativo

es también un potencial de empresario, de creador en el ámbito productivo.

Los partidarios del liberalismo se vanaglorian de dejar vía libre al espíritu emprendedor. En realidad, la economía capitalista de mercado, sólo lo permite a una pequeña minoría de hombres y de mujeres, menos del 10 por 100 de los habitantes de los países industrializados y semiindustrializados y mucho menos todavía en los países más pobres. Esta forma particular del espíritu de empresa, orientada exclusivamente hacia el enriquecimiento privado, no desemboca en la meritocracia, sino en la supervivencia del que gana sin importarle los medios que utilice para ello, recurriendo a los acuerdos ilícitos, al robo, a la corrupción y a crímenes todavía peores. El origen de la mayor parte de las grandes fortunas actuales lo confirma.

El concepto de meritocracia puede resultar claramente mistificador a la luz de las enormes diferencias de retribuciones entre las cumbres de la jerarquía capitalista por una parte y los medianos productores, tanto manuales como intelectuales, por otra. El director de *Holmes Protection*, despedido después de haber llevado a esta empresa al borde de la quiebra, recibió medio millón de dólares como indemnización por cese en el cargo. (*The Times*, 6 de mayo de 1991). Los directores de las grandes empresas británicas se han adjudicado aumentos de sueldo de hasta el 180 por 100 en 1990-1991 (el de John Baker, de National Power, 180 por 100) llegando así a retribuciones de 250.000 a 350.000 dólares anuales (*Sunday Times*, 7 de julio de 1991). Al mismo tiempo, los asalariados llamados medios siguen ganando 20.000 dólares anuales, o incluso menos, en Gran Bretaña. Se les niegan aumentos de menos del 10 por 100 aduciendo que éstos «provocan la inflación». En los Estados Unidos, los jefes de las grandes corporaciones se adjudican fácilmente retribuciones anuales de un millón de dólares, a los cuales se suman opciones sobre acciones sin riesgos (compradas sólo en caso de tendencia al alza en la cotización).

¿Se puede defender con seriedad la idea de que un obrero que fabrica máquinas-herramientas, que un técnico electrónico o que un investigador científico tienen veinte veces «menos mérito», o aportan veinte veces menos bienes a la sociedad que un especulador o un director financiero?

El mito de la meritocracia se basa en un razonamiento circular que resume toda la filosofía social del capitalismo. No se trata de la supervivencia de los más meritorios, sino de la supervivencia de los que triunfan (*survival of the fittest*), midién-

dose el éxito, por definición, por la renta obtenida, independientemente de la manera en que se consiga y de las consecuencias sociales de esa manera de adquisición. Pero esta filosofía social se vuelve inmediatamente contra sí misma, ya que los asalariados la invocan para justificar sus reivindicaciones. Porque ellos no tienen el derecho de tratar de aumentar sus ingresos directos e indirectos por todos los medios, especialmente por una sindicalización integral, una negociación colectiva libre de todo apremio jurídico, de huelgas con piquetes pacíficos, etcétera. Se considera que estos intentos «desestabilizan la economía», léase la economía capitalista basada sobre el imperio del beneficio.

Numerosos autores no marxistas subrayan por otra parte los efectos deplorables de la economía basada en el ansia del enriquecimiento privado. Así Robert Kurz (*Der Kollaps der Modernisierung*, Eichborn-Verlag, Frankfurt, 1991) describe cómo la contradicción fundamental de la «modernidad» [habría que decir más bien de la sociedad burguesa, E. M.] reside en el hecho de que la producción social se vuelve contra su contenido, «que el dinero convertido en un fin en sí mismo, se vuelve contra el mundo sensiblemente concreto (*sinnlich konkrete Welt*)...», ya que el fin último de todo este espectáculo no es ya la mediación de bienes concretos, sino la transformación del dinero en más dinero [en términos todavía más concretos: la acumulación de capital, E. M.]. Todo esto se encuentra casi literalmente en los escritos de madurez de Marx y de Engels.

La liberación del espíritu de empresa, de la iniciativa creadora e innovadora en gran número de productores/ras es perfectamente posible, desde el momento en que la experiencia les demuestre que ya no trabajan más «para el inglés», que el fruto de sus esfuerzos será para ellos, que este resultado es visible a simple vista y no revelado por unas estadísticas. Para esto se requiere, sin duda alguna, una motivación de trabajo fundamentalmente diferente de la que existe en la sociedad capitalista o en la sociedad dominada por las burocracias. No hay nada de utópico en esperar que aparezca una motivación de este tipo.

La mayor parte de los descubrimientos médicos y científicos ocurridos en el último siglo son el resultado de ello. La agricultura no comercial de América Latina ha registrado éxitos en el mantenimiento del equilibrado ecológico que sobrepasan con mucho a los de la agricultura capitalista.

La fuente principal del surgimiento de una nueva motivación de este tipo podría ser la posibili-

dad de reducir una vez más de manera radical la duración del trabajo y de mejorar simultáneamente la calidad de vida. Ya en la actualidad, estos motivos pueden más que la búsqueda del acrecentamiento de los beneficios monetarios, como lo atestiguan numerosos sondeos.

Incluso en Alemania y en Japón, el porcentaje de los que dan prioridad absoluta a la reducción del tiempo de trabajo avanza de un sondeo a otro <sup>9</sup>. En Francia, un sondeo realizado en julio-agosto de 1991 revela que incluso los diplomados de las «grandes escuelas» aspiran, en gran parte, a una semana de cuatro días de trabajo, a «poder trabajar cuando se desea y a dedicar más tiempo a las actividades personales» (*Le Monde*, 23 de octubre de 1991), incluso a vivir de rentas.

La base material de semejante salto adelante de la productividad del trabajo en función de una nueva creatividad de los/las productores/ras es, sobre todo, el potencial de trabajo apenas explorado de la 3.<sup>a</sup> revolución tecnológica (microelectrónica, informática, semiautomatización), siempre y cuando se respeten las exigencias ecológicas. La experiencia contradice al prejuicio burgués según el cual se produce más si se trabaja más, con la misma tecnología o una tecnología comparable.

En 1990, una persona activa, en Japón, trabajaba una media de 2.321 horas por año y producía el equivalente de 1.475 dólares de bienes y de servicios. En la antigua República Federal de Alemania, sólo trabajaba 1.633 y, sin embargo, producía el equivalente de 2.185 dólares de bienes y de servicios (*Die Welt am Sonntag*, 5 de mayo de 1991). Trabajando un 30 por 100 menos de horas, producía casi el 50 por 100 más de bienes.

La economía capitalista y la economía dirigida han demostrado que son incapaces de explotar plenamente este potencial, sin duda la segunda más que la primera. Pero los empresarios capitalistas más inteligentes son perfectamente conscientes de esta deficiencia de su sistema. He aquí la razón fundamental del cuestionamiento del taylorismo, de técnicas como los «círculos de calidad» de inspiración japonesa, de la vuelta a los pequeños equipos basados en la cooperación elemental de la «flexibilización» gradual del trabajo, etcéte-

ra. Pero el talón de Aquiles de todas estas experiencias, sea cual sea su alcance —que a menudo se exagera—, es que se trata de resolverse en el ámbito del taller lo que sólo puede resolverse en el ámbito de la sociedad en su conjunto. Equipos de trabajo pretendidamente libres para colaborar quedan insertos en unas empresas y una economía regidas por las obligaciones de la competencia, o sea, las del beneficio, las de la inseguridad en el empleo, las del control sobre el trabajo por otros, notablemente por los jefes y directores de empresa. La libertad resulta muy limitada o en gran medida ficticia.

Sea cual sea el porvenir del trabajo humano y la dinámica previsible de la robotización (más correctamente: de la semiautomatización), mientras los hombres y las mujeres deban trabajar para la satisfacción de las necesidades humanas, la cuestión clave seguirá siendo la de la naturaleza social de su trabajo y de la organización de éste: libre o forzado. Sólo en la medida en que el ser humano sea libre podrá realizar plenamente su potencial creador. Sólo en un economía socialista se puede ser libre.

La aceleración de la innovación tecnológica implica la necesidad de un aprendizaje/reaprendizaje acelerado en todos los sectores de la actividad económica y se extiende sobre gran parte de la vida. Los industriales más inteligentes lo han comprendido a su manera (véanse en particular los informes del profesor Vloeberghs y del industrial Nolf al Foro de Guía del Personal, organizado por el diario flamenco *De Standaard*, reproducidos en los números de 21-22 de diciembre de 1991 de dicho periódico).

Algunos industriales extienden tímidamente esta conclusión referida a una parte de su personal, y se apoyan para ello en experiencias de «control de calidad», de «programas continuos de mejoramiento», etc., pero el propio profesor Vloeberghs reconoce que es difícil para los industriales tratar a los miembros del personal en pie de igualdad, y que «las consideraciones jerárquicas» crean a menudo dificultades.

Pero ¿acaso estas «consideraciones jerárquicas» no están indisolublemente unidas a la naturaleza misma del sistema capitalista, a los imperativos de la competencia y del beneficio? ¿Y la apli-

<sup>9</sup> Una encuesta reciente realizada en Japón ha dado un resultado muy significativo: un 41,3 por 100 de las personas interrogadas prefieren una reducción de la jornada de trabajo a toda otra mejora de su situación (frente a un 27,5 por 100 en 1986) y el 61,7 por 100 eran partidarios de una reducción inmediata del tiempo de trabajo (frente a 48,8 en 1986).

En la RFA, uno de los directores del Dresder Bank, M. Etzel, afirma decepcionado: «Nosotros, los alemanes, empezamos a volvernos perezosos.» La duración media del trabajo ha bajado de 2.080 horas por año en 1960 a 1.506 horas en 1990. Cada asalariado/da alemán/na se toma seis semanas de vacaciones remuneradas y se ausenta por enfermedad 10,8 días por año (frente a 8,1 en los Estados Unidos y 4,6 en Japón). (Citado por el diario flamenco *De Standaard* de 27-28 de julio de 1991.)

cación de las técnicas de asociación del personal de cierto número de empresas a los procesos de toma de decisiones no va acompañada del desarrollo de la «sociedad dual», es decir, de la descualificación, incluso de la semimarginalización de un número cada vez mayor de individuos?

Así es posible captar en todo su vigor la visión profética de Karl Marx en el célebre pasaje de sus *Grundrisse*:

«El robo del tiempo de trabajo de los demás, en el que se basa la riqueza actual, se presenta como una base miserable en comparación con la que ha sido creada por la propia gran industria. Puesto que el trabajo inmediato ha dejado de ser la gran fuente de riqueza, el tiempo de trabajo ha dejado y debe dejar de ser su medida, al igual que el valor de cambio debe dejar de ser (la medida) del valor de cambio [es decir, la producción mercantil debe decaer, E. M.]. El exceso de trabajo de la masa (de los productores) ha dejado de ser la condición del desarrollo de la riqueza general, del mismo modo que el no trabajo de un pequeño número ha dejado de ser (la condición) para el desarrollo de las fuerzas generales de la mente humana... El libre desarrollo de la individualidad..., la reducción del trabajo necesario de toda la sociedad a un mínimo, al cual corresponde, por tanto, la formación artística, científica, etc., de los individuos, gracias al tiempo libre y a los medios así creados por todos ellos [pasa a ser el objetivo]

...

El desarrollo del capital fijo indica hasta qué punto los conocimientos sociales generales, *knowledge*, se han convertido inmediatamente en una fuerza productiva.

...

La riqueza real es la fuerza productiva desarrollada por todos los individuos. Así pues, no es ya el tiempo de trabajo, sino el tiempo disponible el que se convierte en medida de la riqueza» (Karl Marx: *Grundrisse des Kritik der politischen Oekonomie*, Dietz-Verlag, Berlín, 1953, págs. 593, 596, 599.)

«La economía del tiempo de trabajo es igual a la extensión del tiempo libre, es decir, del tiempo para el desarrollo pleno y total del individuo, lo que redundará, a su vez, como principal fuerza productiva, en la productividad [general] del trabajo... El tiempo libre —que es tanto tiempo de ocio como tiempo para actividades superiores— ha transformado evidentemente a su propietario en otro sujeto, y bajo la forma de este otro sujeto reingresa en el proceso de la producción inmediata.»

En otras palabras, *el tiempo libre y no el tiempo de trabajo es ahora la principal fuente de riqueza*. Pero siempre y cuando esté disponible para todos los individuos, siempre y cuando no haya separación entre productores/ras por una parte y acumuladores/administradores por otra. Siempre y cuando estemos en una economía socialista.

Estimamos, sin temor a incurrir en grandes errores, que para realizar el conjunto de estos objetivos de emancipación a partir de las prioridades antes esbozadas, entre el 75 y el 80 por 100 de los recursos actualmente disponibles deberán ser sustraídos al dominio del mercado. Este subsistirá en el resto de la economía, en relación, sobre todo, con la pequeña producción y, en parte, con la distribución minorista, así como con los bienes suntuarios.

En el marco de una estructura socioeconómica, podrá manifestarse gradualmente una revolución psicológica fundamental. Poco a poco, los seres humanos dejarán de medir sus esfuerzos con el rasero de las recompensas y de las sanciones en las cuales se considera que desembocan, es decir, en función de ventajas y desventajas materiales. El libre desarrollo de unas ricas relaciones sociales interhumanas irá ganando terreno gradualmente al ansia de adquisición que a duras penas es una característica antropológica general.

Somos perfectamente conscientes de que nuestras fórmulas no ofrecen respuesta a todo. Una economía basada en la autogestión democráticamente planificada no resuelve en absoluto todos los conflictos de intereses entre grupos sociales o entre individuos.

El marco institucional articulado de la autogestión —en el ámbito del taller, de la empresa, de la comuna, de la región, de la nación, del continente, de la economía mundial— interfiere con las instituciones de la democracia política, que deberían incluir formas de democracia directa y el referéndum de iniciativa popular. Estas instituciones deben crear mecanismos de arbitraje en caso de conflictos. Las competencias científicas y técnicas no deben desembocar en poderes de decisión que vayan en detrimento de la voluntad popular, pero siguen siendo indispensables para la buena marcha de la sociedad.

Sobre todo, las condiciones «normales» de eclosión de una economía socialista a escala internacional no son idénticas a las condiciones —más próximas a nosotros— de los primeros pasos en esta dirección, que sin duda se materializarán en un número reducido de países, incluso en un solo

país. Estos problemas de la transición requieren un tratamiento aparte.

También somos conscientes de que casi no nos hemos ocupado de las condiciones políticas de realización de estos objetivos por la vía democrática, es decir, con protección suficiente de las minorías y con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Esto es otra cuestión.

Lo que nosotros afirmamos es que el «avance real», en este sentido, ya se deja ver en el mundo actual. El resto depende de la praxis de los socialistas/comunistas. Esta praxis debe inspirarse en la regla de oro de que hay una dialéctica concreta del fin y de los medios, de las reformas corrientes y de la revolución, y que ciertos medios (*unheili-*

*ge Mittel*, decía Marx) no pueden conducir nunca al objetivo deseado.

Los imperativos de una falsa *Realpolitik* se oponen a la condición previa mínima para que el socialismo reconquiste credibilidad a los ojos de las grandes masas: que la práctica de los socialistas/comunistas no se oponga a los intereses de éstas y sea acorde con los principios. Sin duda es más difícil, y llevará más tiempo, pero a la larga vale la pena. Como dijo el viejo socialista americano Eugene V. Debs: «Vale más combatir por lo que se quiere realmente, incluso sabiendo que hay pocas oportunidades de obtenerlo, que combatir por lo que en el fondo uno no quiere, sabiendo que se obtendrá con toda seguridad.»